

Cambios en la dinámica del conflicto armado: implicaciones en la economía y en el proceso de negociación

RESUMEN

El estado del conflicto armado colombiano en el momento actual plantea varias incógnitas a las que este artículo pretende responder. Entre otras, si la insurgencia, ante el propósito gubernamental de lograr su derrota estaría dando un viraje hacia la urbanización de la guerra; o si con la agudización de la violencia política, la clase dirigente colombiana recurrirá a la fuga de capitales y la disminución de la inversión, o más bien se decidirá por la construcción de los consensos necesarios para hacer reformas de fondo en un proceso de paz, con lo cual las condiciones para lograr una negociación exitosa estarían madurando.

ABSTRACT

The current state of the Colombian armed conflict raises several questions, which this article intends to answer. Among others, whether or not the insurgence, facing the governmental purpose of defeating it, is turning toward the urbanization of war; whether Colombian ruling class, given the intensification of political violence, will withdraw their capital and decrease investment, or will rather opt for the construction of the national consensus that are necessary for the deep reforms in a peace process, given which conditions for a successful negotiation would be maturing.

INTRODUCCIÓN



La insurgencia colombiana, que en las dos últimas décadas logró extender su presencia a zonas de gran significado en el desarrollo de la confrontación, hacia finales de los años noventa comienza a enfrentar el riesgo muy serio de hacerse militarmente vulnerable debido a que, por una parte, los grupos paramilitares entraron a disputarle el control de posiciones con elevado valor estratégico, y a que, de otro lado, la ampliación de la capacidad operativa y la inteligencia adquirida por el Estado en la lucha contrainsurgente en los últimos años, le representa un claro impedimento para pasar a otro estado de la guerra en el que buscaría ampliar su dominio territorial efectivo.

El fracaso de las negociaciones con las Farc durante el gobierno Pastrana y la manifiesta intención del gobierno Uribe de enfrentar a la guerrilla con un mayor esfuerzo militar, ha hecho que las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en armas se modifiquen en función de los cambios en la dinámica de la confrontación. Este nuevo escenario plantea varias incógnitas: la primera es si con un mayor esfuerzo militar se va a lograr el sometimiento de los alzados en armas y por consiguiente la superación del conflicto interno; la segunda es si la insurgencia, ante el propósito gubernamental de lograr su derrota, estaría dando un viraje hacia la urbanización de la guerra y el sabotaje contra la infraestructura para evitar su debilitamiento; la tercera es si

* Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la Conferencia Internacional: *Colombia-Caminos para salir de la violencia*, Frankfurt, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 27 al 28 de junio de 2003.

con los cambios en la conducta de la guerrilla se producirá el colapso de la economía nacional, y la cuarta es si con la agudización de la violencia política, la clase dirigente colombiana optará por aplicar una racionalidad privada asumiendo los costos de la inseguridad, con efectos como la fuga de capitales y la disminución de la inversión, o más bien optará por la construcción de los consensos necesarios para hacer reformas de fondo en un proceso de paz, con lo cual las condiciones para lograr una negociación exitosa estarían madurando.

El objetivo de este artículo es responder a estas preguntas mediante el análisis del estado actual del conflicto interno, los cambios en la conducta de sus principales actores y las posibles implicaciones en la economía y en el proceso de negociación.

CAMBIOS EN LA DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO

A partir de la ofensiva del Ejército contra el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el municipio de Uribe-Meta en 1990, la organización insurgente logró avanzar en el proceso de especialización de sus frentes y la creación de grupos de choque, como las columnas móviles (Salazar, 2000)¹. En 1993 ya se vislumbraban los primeros ensayos en esta experiencia, con el ataque a Dabeiba y el bloqueo en la región de Urabá donde participaron más de 500 guerrilleros del Bloque José María Córdoba. Pero es sólo hasta la toma de la Base de Las Delicias en 1996, que se establece el punto de partida de una serie de éxitos militares indicativos de una mayor capacidad ofensiva.

El escalamiento del conflicto armado registrado a partir del inicio de los años noventa evidencia el poderío militar alcanzado por la guerrilla, basado en el hecho de haber encontrado fuentes de recursos económicos muy importantes que a su vez ha determinado su visión optimista en cuanto a la continuación de la guerra. Por lo tanto, la prolongación del conflicto colombiano tiene como fundamento la autonomía adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, haciendo que la búsqueda de un mayor apoyo social constituya una preocupación secundaria².

Pese a la marcada presencia guerrillera en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y de importancia agropecuaria, en Colombia la economía de guerra ha dejado de depender exclusivamente del dominio territorial de estas zonas rurales por parte de los diferentes grupos armados. En efecto, los fondos también se obtienen de actividades como la extorsión y el secuestro, que no requieren de un elevado poderío militar para su ejecución. De hecho, estas prácticas ya comienzan a aplicarse con bastante frecuencia en áreas urbanas, donde los grupos alzados en armas no tienen dominio territorial efectivo.

Con la diversificación de su presencia territorial, la guerrilla logró en los últimos dos decenios expandirse hacia localidades cercanas a los centros administrativos y políticos del país, sin que ello haya implicado una pérdida de su influencia en zonas de implantación histórica donde conservan sus principales fuentes de financiamiento. La constatación del crecimiento de la insurgencia hacia las zonas urbanas a un ritmo mucho mayor de lo que crece a nivel global podría estar sugiriendo la existencia de un plan de crecimiento y de consolidación de la influencia política (Echandía, 1999). Esto sucede cuando se han consolidado suficientes "zonas de contención" como para hacer imperativa la construcción y consolidación de "zonas de expansión"³. Examinar atentamente esta tendencia tiene un particular interés en el momento actual debido a que desde el 7 de agosto de 2002 han venido ocurriendo en el ámbito urbano eventos que golpean directamente la psicología colectiva (como el ataque con morteros a la Casa de Nariño o el atentado contra el club El Nogal). Dada la gravedad de las implicaciones para la estabilidad política y económica del país es necesario descubrir el verdadero alcance de la eventual urbanización del conflicto armado.

La información estadística que se presenta en los gráficos 1 y 2 permite constatar el incremento en la intensidad del conflicto armado y pone al descubierto la mayor capacidad ofensiva con que cuentan, en particular las Farc, desde comienzos de los años noventa. Las acciones propias de la guerrilla (contactos armados, hostigamientos y sabotajes a la infraestructura económica) aumentaron ostensiblemente en el conjunto de acciones armadas, mientras que las formas clásicas para la obtención de fondos (asaltos al comercio y a las entidades bancarias) tendieron a disminuir. Estos cambios revelan el poderío militar de los grupos armados al margen de la ley como resultado de la diversificación en sus prácticas de financiamiento que hoy dependen en mayor proporción del secuestro, la extorsión, y las contribuciones del narcotráfico.

Si se analiza el grado de concentración de la actividad armada de la guerrilla en el nivel municipal, se descubre que más de la tercera parte de las acciones producidas entre 1998 y 2001 se aglutinan en no más de cuarenta municipios (ante todo rurales). Así mismo, se pudo establecer que en este lapso, 34% de las acciones armadas más recurrentes en el conflicto protagonizado por las Farc se concentró en cuarenta municipios. En el caso del Eln se registra una concentración aún mayor, ya que en tan sólo cuarenta municipios, se produce el 55% de sus acciones.

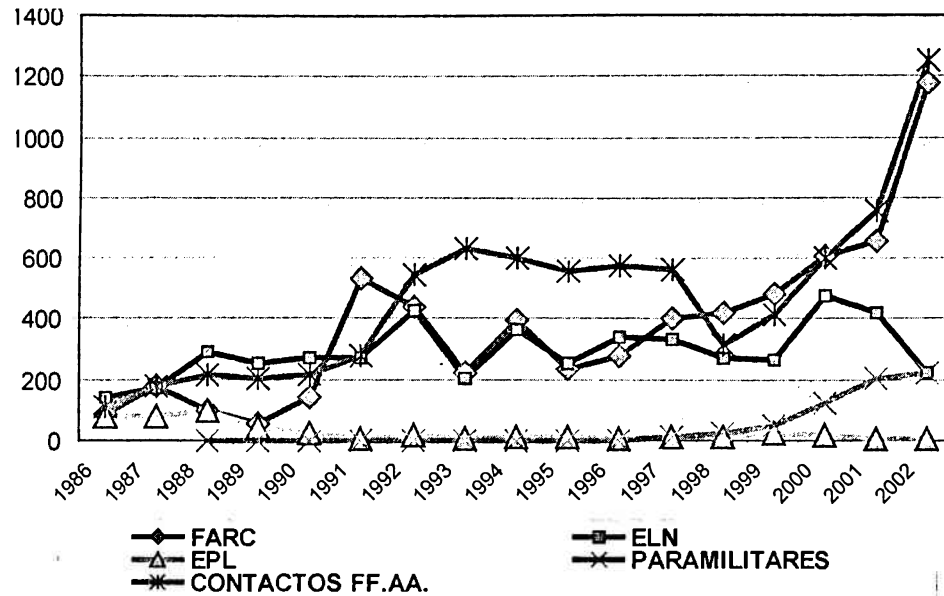
En la medida en que el mayor poderío militar de las organizaciones alzadas en armas continúa estando donde se implantaron los primeros núcleos, las zonas más afectadas por la elevada intensidad del conflicto en el presente son

¹ Estas estructuras responden no sólo a la estrategia del Estado de las Brigadas Móviles, sino también al comienzo de la búsqueda del salto cualitativo en el desarrollo de la guerra.

² Paul Collier, en varios de sus trabajos, muestra que –como sucede en Colombia– las guerras internas se encuentran acompañadas de bonanzas en productos agrícolas, mineros o ilegales, que han dado la posibilidad a los grupos insurgentes de saquear los recursos necesarios para financiarse, condición que determina la viabilidad de la guerra civil. Según este autor, las rebeliones dependen en forma crítica de la utilización de recursos para la persecución de otros objetivos. Por tanto, los factores económicos –como la exportación de bienes primarios– son decisivos en la viabilidad de los conflictos internos.

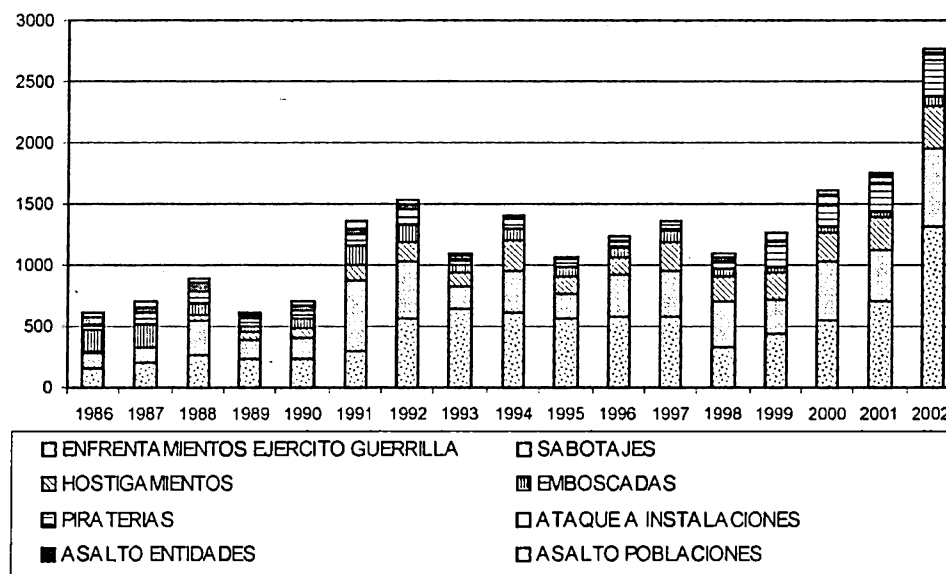
³ Este análisis se basa en el desarrollo de la guerrilla salvadoreña donde ese cambio coincidió con la especialización del aparato clandestino y con que las actividades económicas predatorias e intermitentes que caracterizaron a la guerrilla de la primera etapa dieron lugar a una actividad económica continuada: la extorsión, el secuestro y el cobro de un impuesto revolucionario. El tipo de racionalidad económica, las formas de financiación características de las diferentes organizaciones guerrilleras según su estrategia y grado de organización son analizadas en este trabajo (Naylor, 1993).

Gráfico 1. Evolución de la iniciativa armada de la fuerza pública y de las organizaciones ilegales



Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Gráfico 2. Participación de las acciones más recurrentes en el conflicto armado (1986-2002)



Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

⁴ Esta etapa, que empezó en 1981 en aquel país, y que de manera creciente convirtió a los alcaldes en objetivos militares como medio para consolidar poder en las zonas de conflicto.

ante todo rurales y apartadas de las actividades económicas más dinámicas, localizadas en las zonas planas integradas a los principales centros de desarrollo nacional. En efecto, 57% de los municipios afectados en el presente por la elevada intensidad del conflicto armado, pertenecen a la estructura rural atrasada y de colonización; 18% son del tipo campesinado medio; 10% se caracterizan por el predominio de la agricultura comercial, y sólo el 15% pertenece a la estructura urbana.

Entre los cambios recientes más significativos observados en la dinámica del conflicto, se destaca la manifiesta prioridad que las Farc les die-

ron entre 1997 y 2001 a los ataques a las poblaciones para destruir los puestos de policía y debilitar la presencia estatal en los municipios donde buscaban ampliar su influencia. A partir de mediados de 2002, mediante amenazas contra los alcaldes y concejos municipales para obligarlos a renunciar, las Farc buscan afectar la gobernabilidad local. Se vislumbra así la salvadorización del conflicto colombiano⁴.

Por su parte, desde 1998 la Fuerza Pública ha demostrado superioridad militar por medio de una mayor capacidad de reacción aérea para contrarrestar los ataques de los alzados en armas, logrando en varias oportunidades frus-

trar sus intenciones y producirle un alto número de bajas. Sin embargo, un desmedido optimismo ante el mejor desempeño de la Fuerza Pública puede llevar a subestimar la comprobada capacidad de la guerrilla para responder a las nuevas realidades militares. En efecto, si se reconoce la manera hábil como la guerrilla que se mantiene en pie de lucha ha logrado adaptarse a los cambios propuestos por el Estado para vencerla, resulta poco probable que se produzca su derrota en el corto plazo.

La desventaja aérea de las Farc, representa un impedimento para pasar a otro estado de la guerra en el que esta guerrilla buscaría ampliar su dominio territorial efectivo sin poner en riesgo el territorio que ya domina. Por lo tanto, mientras compensa su inferioridad militar, esta guerrilla ha dejado de lado al Ejército como objetivo principal, limitando los propósitos de los escasos ataques contra aquel para evaluar su capacidad de reacción, lo cual se traduce en el momento actual en una inquietante pasividad operacional, que no permite descartar que se esté preparando para desatar una ofensiva de grandes proporciones.

Los cambios experimentados recientemente también se relacionan con el Ejército de Liberación Nacional, Eln. La acción de los grupos paramilitares y la mayor decisión del Ejército a partir de 1996, lograron romper la retaguardia de este grupo, que pierde hegemonía en una franja del territorio que abarca desde el nordeste antioqueño hasta Norte de Santander. A esto se suma la pérdida de influencia en Barrancabermeja, así como en Cúcuta y en Medellín (mientras que en Arauca las Farc avanzan sobre las posiciones tradicionales más preciadas del Eln). Se puede suponer que las Farc aspiran a absorber al Eln, proceso que se ha venido dando de varias formas:

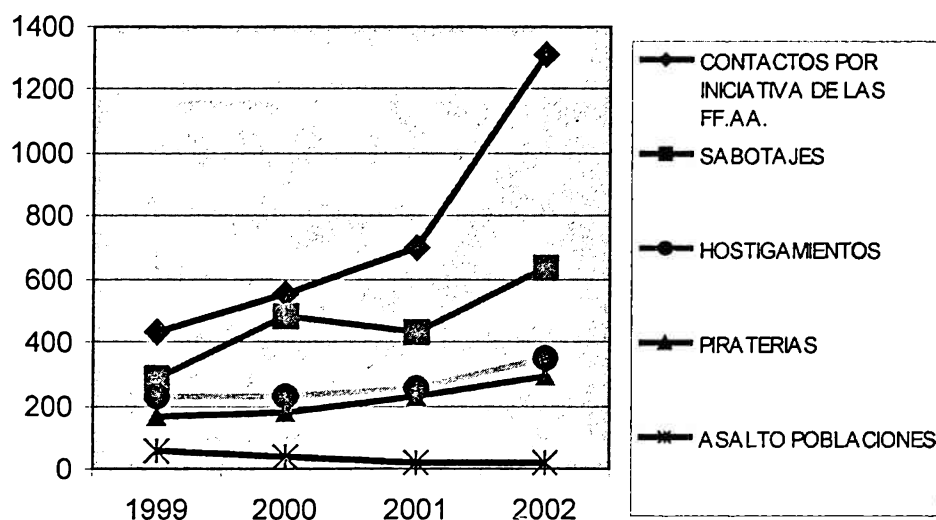
reforzando los frentes del Eln para evitar más derrotas militares (como se puede constatar en el sur de Bolívar); haciendo presencia en zonas de influencia tradicional del Eln (como se ha visto en Arauca) y defendiendo territorios de manera conjunta (como viene ocurriendo en Norte de Santander).

Ante el fracaso de las negociaciones con las Farc en el gobierno Pastrana y la manifiesta intención del gobierno Uribe de enfrentar el desafío de la guerrilla con un mayor esfuerzo militar, se ha visto cómo las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en armas se han modificado en función de los cambios en la dinámica de la confrontación (véase gráfico 3). La mayor presión de las autoridades sobre las estructuras armadas de la guerrilla, ha hecho que éstas eviten golpes contundentes mediante el repliegue táctico hacia sus zonas de refugio y la realización de acciones a través de pequeños grupos de no más de 15 hombres. Así mismo recurren al minado de los accesos a sus zonas estratégicas, a las acciones de sabotaje contra la infraestructura económica y al terrorismo urbano. Con este último comportamiento, las Farc parecen estar buscando de manera calculada que la Fuerza Pública disminuya la presión en áreas de importante valor estratégico a nivel rural y se concentre en las ciudades y los cascos urbanos de los municipios.

LÓGICA DE LA VIOLENCIA PRODUCIDA EN MEDIO DEL CONFLICTO

Pese a que el conflicto armado y, con mayor precisión, las acciones de las guerrillas y los paramilitares hacia la población, expliquen hoy la elevada concentración de homicidios en zonas específicas del territorio nacional, la violencia en el país sigue siendo atribuida

Gráfico 3. Acciones más recurrentes de la guerrilla y de la FF.AA. en su contra (1999-2002)



Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

mayoritariamente a un fenómeno cultural generalizado, enraizado en las características de la sociedad. Así mismo, la sabiduría convencional ha establecido una estrecha relación entre “condiciones objetivas” y violencia, concediéndole menor importancia a los actores armados que, para lograr sus objetivos, golpean a los civiles inermes.

El conflicto colombiano, al igual que otras guerras internas registradas en otros países, ha entrado en un proceso en el que las víctimas de la violencia se producen mayoritariamente entre las poblaciones y no entre los combatientes armados (Kaldor, 2001). Vale la pena contrastar esta característica de los conflictos internos recientes, con la visión clásica de distintos teóricos que destacan cómo los enfrentamientos entre contendientes armados ocupan un lugar central en la evolución de la guerra. La idea de confrontaciones supone interacciones entre beligerantes y una repetición de los combates en el tiempo y el espacio que busca la reducción o parálisis de la voluntad de lucha del enemigo. Sin embargo, en los últimos cincuenta años las modalidades de la guerra se han extendido y las poblaciones, que son fuente de respaldo económico, político, moral y logístico, se han convertido al mismo tiempo en medios y objetivos de la confrontación armada. Tienen además un valor militar para los beligerantes que se esconden entre la gente que las conforman o las usan como escudo humano durante los combates y las enrolan para aumentar sus efectivos (Lair, 2003).

La evidencia estadística que se presenta aquí, permite reconocer los cambios en la evolución reciente del conflicto armado, poniendo de presente la existencia de planes cuidadosamente dirigidos hacia el control de posiciones con elevado valor estratégico para los actores en competencia. De igual manera, se mostrará la alta concentración de masacres y asesinatos selectivos en estas zonas, que al mismo tiempo vienen experimentando un incremento de los homicidios indiscriminados.

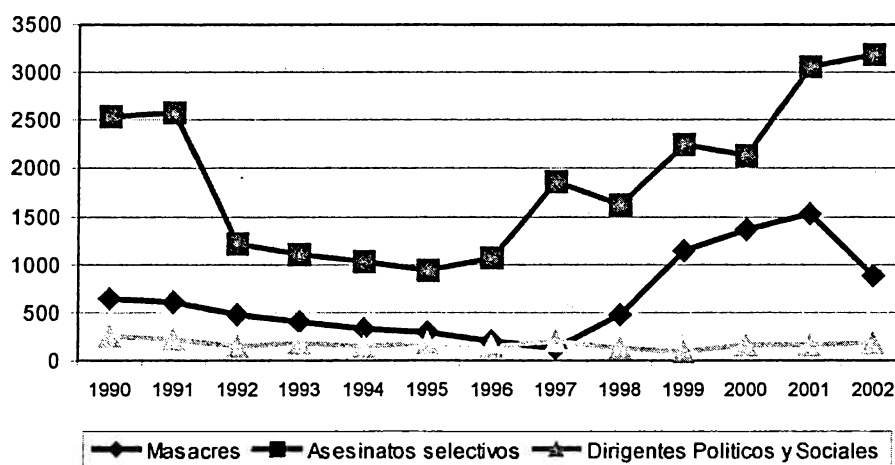
La tendencia creciente de la violencia, representada en el *gráfico 4*, se explica en la medida en que los protagonistas del conflicto armado desencadenan una dinámica donde dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población. En los últimos cuatro años, se han presentado masacres que se explican por la lógica de la expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que divida al norte del centro del país, uniendo Urabá con el Catatumbo, con el objetivo de iniciar las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en el sur y oriente, así como las zonas de expansión en el norte del país.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla ha terminado imitando las prácticas de terror de su adversario y por ello recurre de igual manera a la masacre y al asesinato de civiles. Como se observa en el *gráfico 5*, las guerrillas han incrementado los asesinatos de civiles siguiendo a los grupos paramilitares que son los principales responsables de las muertes. Aun cuando en la mayoría de los casos no se conoce el autor, la correspondencia entre la mayor intensidad con que se producen los asesinatos y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren protagonismo evidencia la participación preponderante de este actor.

De la misma forma como se ha modificado la dinámica del conflicto armado, el objetivo de la disputa entre sus protagonistas también ha cambiado pues la aspiración de lograr control territorial se ha pospuesto para dar paso a la búsqueda de control estratégico (Pécaut, 2002)⁵. En este último sentido se descubre la razón del enfrentamiento entre guerrillas y autodefensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, Montes de María y Nariño, donde los grupos enfrentados actúan con especial intensidad golpeando civiles inermes

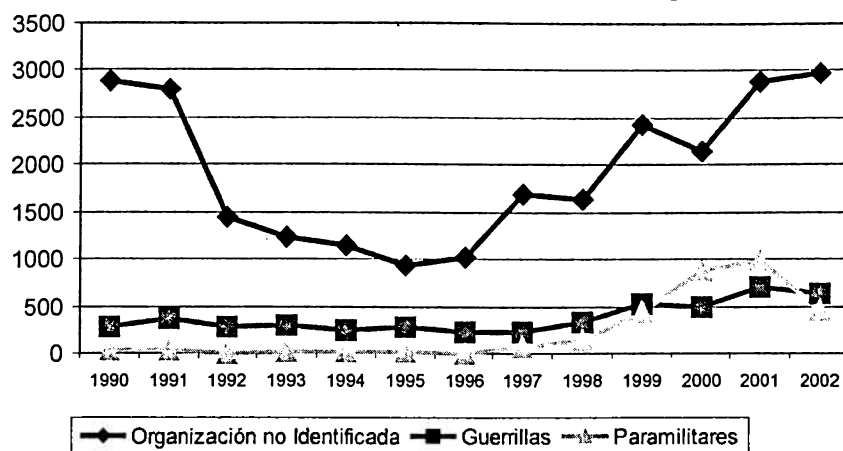
Gráfico 4. Víctimas de las organizaciones armadas ilegales (1990-2002)

⁵ En el primer caso el objetivo de uno u otro actor armado apunta a mantener, por la fuerza y/o con medios indirectos, un dominio sobre una zona sin que esto implique la formulación de normas reconocidas y, menos aún, la adhesión de sectores importantes de la población. Mientras que buscando el segundo objetivo lo que cuenta no es prioritariamente la influencia que permite este control sobre la población sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra.



Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Gráfico 5. Asesinatos cometidos por las organizaciones armadas ilegales (1990-2002)



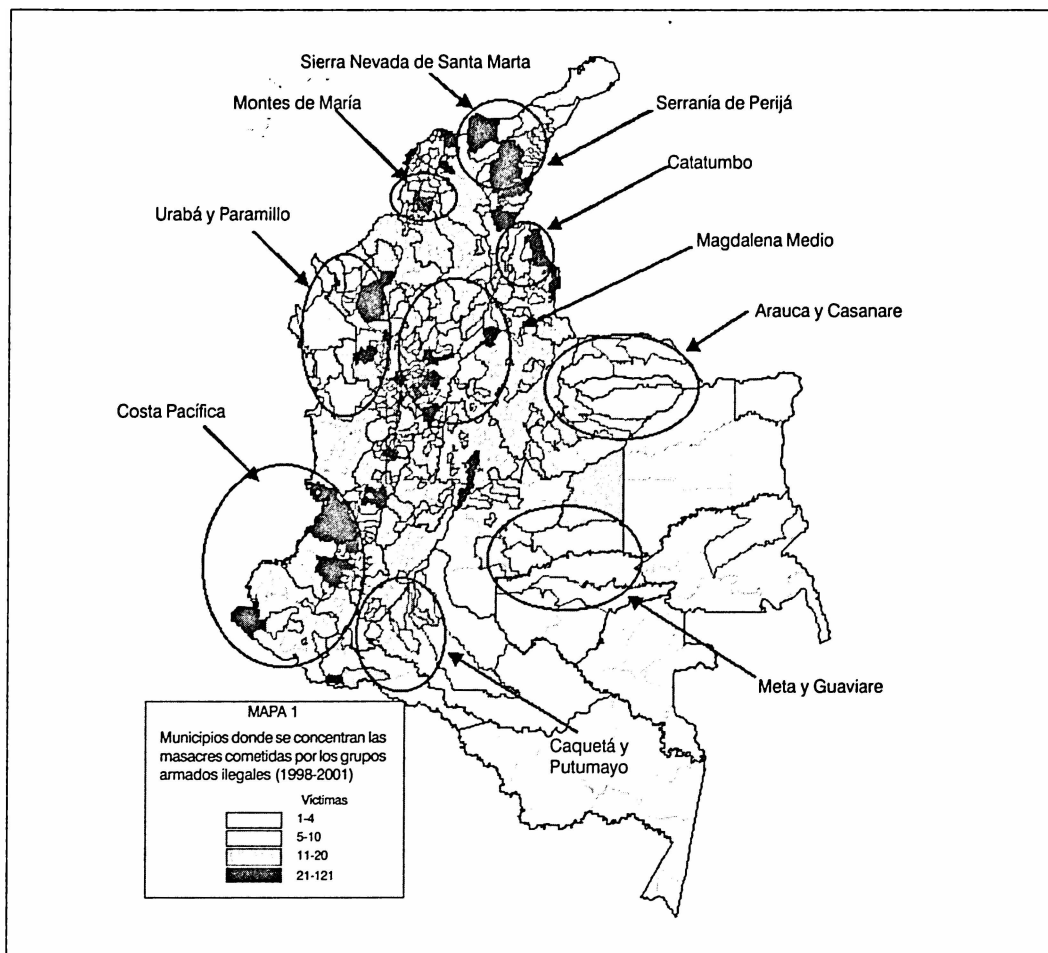
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

con el propósito de lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos⁶.

En estas regiones, que se destacan en el *mapa 1*, la insistencia en la masacre tiene el fin de impedir la consolidación de los avances del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias. Las matanzas pueden ser indiscriminadas. La lista en mano no es más que un sofisma, aunque en ocasiones sea cierta, pues más allá del interés de matar al apoyo del actor armado, está el demostrar a la población afecta o que ha con-

vivido con éste, que no la puede defender y que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al nuevo actor que terminará sometiéndola bajo el terror.

A la situación descrita hay que agregar el hecho de que las comunidades ante la presión de los grupos armados en los cascos urbanos, muchas veces ubicados en zonas estratégicas a lo largo de los ríos y carreteras, han preferido desplazarse al área selvática, o han quedado inmovilizadas en sus lugares de residencia. Muchas regiones son, cada vez más, objeto de bloqueos económicos en buena parte de su te-



⁶ Véase: Escobedo, Echandía y Salazar (2002), *Colombia: conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH* (1998-2002).

rritorio, interrupciones en el suministro de provisiones y las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.

Un ejemplo dramático de esta situación lo proporciona Chocó. En el mes de abril de 2002, se registró en Bojayá un enfrentamiento que produjo la masacre de 119 civiles, entre ellos 46 niños, en el fuego cruzado entre destacamentos de las autodefensas y las Farc. La población civil había buscado refugio en la iglesia de Bellavista, donde fueron alcanzados por un mortero hechizo de las Farc. También se produjo un número indeterminado de combatientes muertos entre los integrantes de las fuerzas irregulares. En el momento actual la mayor parte de los pueblos y pequeños centros urbanos a lo largo de los ríos Atrato, Baudó y San Juan, cuentan con una elevada presencia paramilitar. A su vez los pueblos ubicados en sectores más altos, registran la presencia mayoritaria de los grupos guerrilleros, en especial de las Farc. Ambas fuerzas tienen puestos de control en los ríos y carreteras para vigilar el movimiento de personas y productos.

El enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales y las acciones que éstas dirigen contra los civiles explican los elevados niveles de homicidios; no hay al menos otra razón de cambios tan bruscos en los homicidios en contextos en que la guerrilla y los paramilitares luchan por el predominio. Por lo tanto, existe una elevada concentración de las muertes causadas por los protagonistas del conflicto armado en escenarios donde son elevados los homicidios indiscriminados.

Entre 1998 y 2001, el 20% de los homicidios registrados en el país se produjo en tan sólo 20 municipios localizados en el norte del país (la Sierra Nevada de Santa Marta y el Catatumbo); centro (Viejo Caldas, Valle, Cundinamarca, Tolima y Meta); sur (Caquetá y Putumayo), y costa Pacífica (Cauca y Nariño entre los ríos Naya y Patía). Al considerar el 40% de los homicidios, éste se concentró en 60 municipios en su mayoría localizados en los alrededores de los focos mencionados anteriormente. En la medida en que el porcentaje de concentración se eleva al 60 y 80%, es más notorio el patrón de difusión de los homicidios desde los focos iniciales hacia municipios localizados en el oriente (Arauca y Casanare), y el río Guaviare (Guaviare y Meta), Caquetá y Putumayo, en el noroccidente (Urabá y Paramillo), y el Magdalena Medio.

El patrón espacial y temporal de difusión y contagio en la geografía del homicidio determinado por el accionar sistemático de los actores organizados, se define bajo el término de "difusión contagiosa" (Cohen y Tita, 1999). Entre las zonas donde se observa una alta difusión de la violencia homicida, se destacan la parte occidental de las cordilleras, el valle interandino del río Cauca en los departamen-

tos del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, y la parte oriental de las cordilleras en zonas de colonización de frontera de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.

Alrededor de doscientos de los trescientos cuarenta municipios que se destacan por su elevada concentración de homicidios en el *mapa 2*, a la vez se encuentran afectados por el conflicto armado, así como muchos registran una alta aglutinación de asesinatos causados por los actores organizados de la violencia. De tal suerte, el análisis de los mapas presentados aquí, sugiere que la geografía del homicidio tiene una alta correspondencia con las organizaciones de justicia privada que actúan en el norte del Valle, el Viejo Caldas, la montaña antioqueña y la región occidental de Boyacá; mientras que en el piedemonte de la cordillera Oriental (municipios dispersos de Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, Guaviare y parte del Putumayo), Urabá, Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, la Serranía del Perijá y el Magdalena Medio (municipios de Bolívar, Cesar, Antioquia y Santander), como ya se ha dicho, la violencia sería atribuible mayoritariamente a la disputa entre los grupos paramilitares y la guerrilla.

La acelerada degradación del conflicto armado hace necesario que los esfuerzos del Estado se concentren en la población civil, protegiéndola y rodeándola de las garantías que hagan valer sus derechos. Una de las acciones más relevantes a ser implementada es la atención humanitaria a las víctimas del conflicto, de manera que se disminuya el impacto de su situación. En la medida en que la problemática del desplazamiento forzado ha asumido crecientes y complejas proporciones que requieren de una atención especial, es indispensable atender eficazmente a la población víctima del desplazamiento, mediante programas de titulación de tierras, establecimiento de zonas temporales para la atención de desplazados, y el diseño y puesta en práctica de estrategias que garanticen el retorno seguro y voluntario. Así mismo, es de la mayor importancia impedir el bloqueo de las poblaciones y garantizar la libre circulación de alimentos y otros productos básicos en las zonas afectadas por las hostilidades.

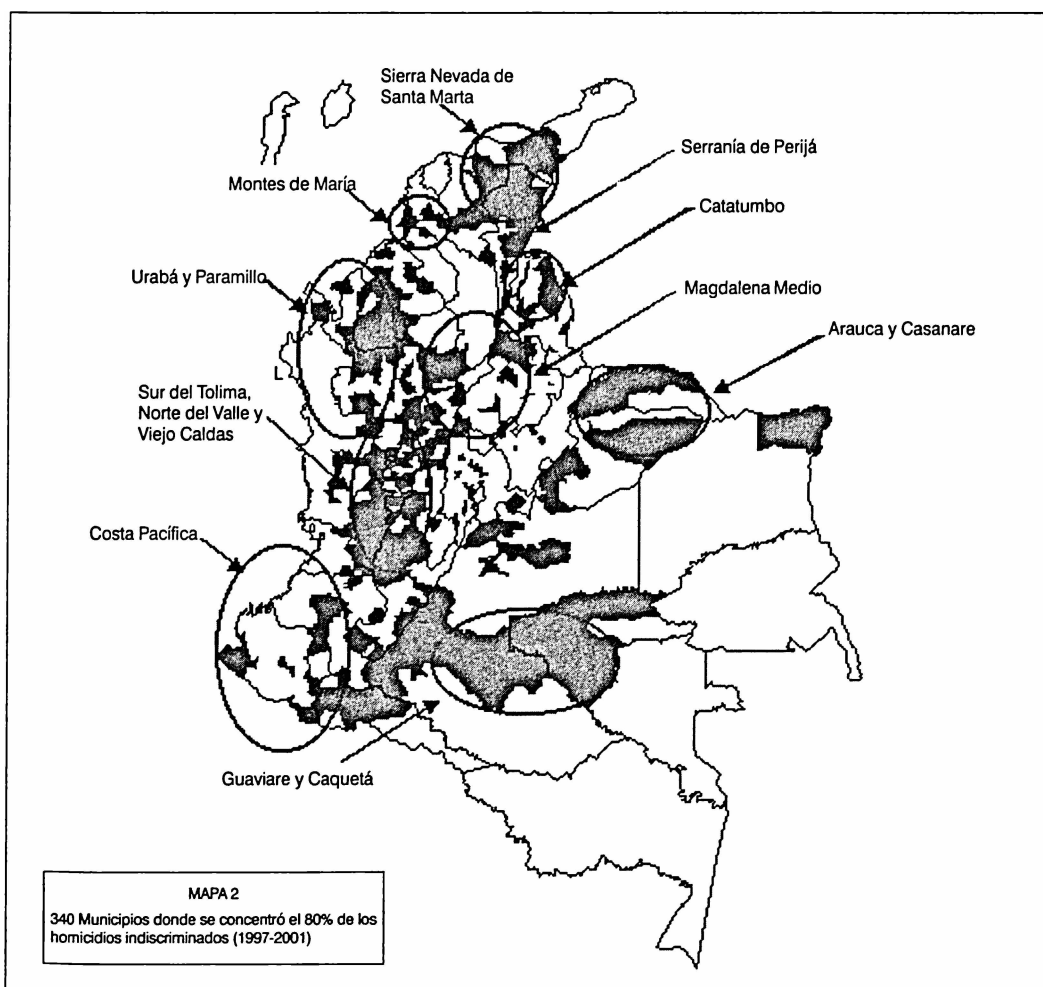
IMPLICACIONES EN LA ECONOMÍA

Si se tiene en cuenta la gravedad de la situación colombiana, ha sido poco el esfuerzo dedicado por los analistas a examinar las implicaciones del conflicto y la violencia sobre el sistema económico en su conjunto o sobre actividades específicas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha estimado los costos directos entre 1990 y 1998 en \$ 3.2 billones anuales, correspondientes al 2.1% del PIB en términos de violencia urbana, y al conflicto armado 2.4% del PIB (Badel, 1999). En todo caso,

se podría convenir, como lo señala Rubio (1999), que al excluir de estos cálculos los costos indirectos, como la pérdida de confianza en el sistema de justicia, la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado, los efectos en términos de bienestar sobre la población y/o los costos de transacción y oportunidad para la sociedad, entre otros, estos estudios subestiman el impacto real de la violencia y el conflicto en Colombia⁷.

Aunque las estimaciones sean aún imprecisas, el impacto económico del conflicto armado y, en particular, de las nuevas modalidades de acción de la subversión que privilegian la destrucción de la infraestructura no parece desdenable⁸. Sin embargo, la clase dirigente colombiana ha creído por largo tiempo que los efectos del conflicto armado se circunscriben a una alcance sectorial rural y a las actividades agropecuarias, a algunas regiones rurales con muy pocos alcances globales y sobre todo sin consecuencias importantes ni para las actividades urbanas, ni para la seguridad de las ciudades. No cabe duda de que esta visión subestima el potencial de transformación y escalamiento del conflicto hacia las áreas urbanas, en una trayectoria que ya se ha experimentado en otros conflictos en diferentes áreas del mundo.

La percepción negativa de las élites urbanas del terrorismo, el secuestro y la extorsión realizados por la guerrilla, se pone de presente en los resultados de la encuesta realizada entre industriales en 1999 (*Encuesta empresarial de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, El Tiempo*, junio 17 de 1999). El 25% de los encuestados considera que los problemas de la economía se relacionan con la inseguridad, 23% con los altos niveles de tributación, 9% con las dificultades del sector financiero, 7% con la incertidumbre que se respira en el país y 36% cree que la combinación de todos estos factores hace que no exista ningún aspecto favorable que motive la inversión. Es de anotar que al cabo de los primeros cien días de la administración Uribe mejoró la percepción de seguridad y el optimismo del sector privado frente al desempeño de la economía, que se expresa en las mejores expectativas registradas desde 1995 (*Encuesta empresarial de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), El Tiempo*, noviembre 21 de 2002). A pesar de que ocurrieron al comienzo de 2003 eventos como el atentado contra el club El Nogal, con todo el simbolismo que llevaba implícito, es innegable la existencia de expectativas positivas especialmente en relación con la seguridad, tal como quedó plasmado en los sondeos de opinión realizados al cumplirse el primer año de gobierno (Encues-



⁷ Los resultados de un trabajo reciente sugieren que las diferentes manifestaciones del conflicto armado y la delincuencia común desaceleraron significativamente el crecimiento económico de los departamentos en la década del noventa (Querubín, 2003).

⁸ Sólo en la reparación de torres eléctricas averiadas por atentados entre 1999 y 2001 se invirtieron más de 52 mil millones de pesos. Ministerio de Defensa Nacional, Informe de Orden Público 2001, www.mindefensa.gov.co.

ta: Uribe, *¿y ahora qué viene?*, *El Tiempo*, agosto 7 de 2003).

Los resultados del caso colombiano, que muestran que a pesar de la larga duración y elevada intensidad del conflicto, no se presenta por esta causa un impacto demoledor sobre la economía nacional⁹, tendrían explicación en el hecho de que los sectores más afectados han aprendido a convivir con la violencia impidiendo que la economía se desplome. En efecto, muchos sectores de la actividad económica no han tenido alternativa diferente a la de aprender a convivir con la inseguridad desarrollando una elevada “disposición a pagar” (Salazar y Castillo, 2001) que acrecienta la capacidad de los grupos alzados en armas con considerables consecuencias. Es obvio que ni desde el punto de vista social ni del individual, se trata de una estrategia óptima, sin embargo, en las circunstancias de la situación colombiana los agentes afectados por la amenaza contra su vida y su patrimonio, una estrategia como la de pagar llega a ser la mejor alternativa disponible debido a que los agentes de altos ingresos que aceptan el pago de la extorsión exigida por la guerrilla a cambio de seguridad, están actuando en forma racional: en lugar de avenirse al rodeo ineficiente y riesgoso por las vías estatales, o por los servicios de seguridad privada (o paramilitar), prefieren contratar (comprar un seguro) por un cierto período o negociar con el agente directo de la amenaza violenta.

En el sector agropecuario, para mencionar uno de los más golpeados por la inseguridad, en cuanto es un transferente neto de rentas principalmente a la guerrilla en la forma de boleteo, extorsión, secuestro, y en distintos tipos de “contribuciones” cuya cuantificación no es fácil de precisar, se han creado mecanismos para neutralizar los impactos negativos. En efecto, como consecuencia del ausentismo de los propietarios por la inseguridad, los inventarios se han mejorado, las fincas se han sistematizado y se han modernizado las comunicaciones. En el caso del banano los efectos se han neutralizado evaluando la gestión y controlando la salida física del producto mediante las comercializadoras del fruto. En el caso de la palma de aceite, las empresas han colocado personas claves en la actividad agronómica, industrial y en las relaciones con terceros. De esta manera cada uno de ellos tiene sus responsabilidades asignadas, haciendo manejable la situación de riesgo. En el caso de la ganadería, se ha preferido no reinvertir el capital en esta actividad debido al alto riesgo y en cambio se ha hecho en la construcción y en los certificados de depósito a término fijo. En consecuencia se ha mantenido a toda costa la ganadería extensiva evitando hacer inversiones en infraestructura y tecnología.

El hecho de que el impacto económico del conflicto interno no haya alcanzado una magnitud mayor, proviene de su muy particular ar-

ticulación con la economía civil, razón por la cual la guerrilla nunca ha emprendido el saqueo o el sabotaje en forma sistemática, como sí se ha visto en otros países. “Como todo huésped que depende de la salud del organismo receptor, la guerrilla no intenta destruir la economía que le permite su supervivencia y crecimiento, sino maximizar la extracción viable de recursos económicos mientras se fortalece en términos militares” (Salazar y Castillo, 2001). Aunque queda por saberse si en las condiciones actuales de recesión y ausencia de dinamismo en la economía¹⁰ pueda prolongarse esa situación por mucho tiempo sin que se produzca un desenlace definitivo; pareciera que ese momento aún no ha llegado y la guerrilla prefiriera mantenerse como un huésped armado de la economía civil para compensar sus deficiencias militares y seguir avanzando en el logro de sus principales objetivos.

IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Las posibilidades de lograr la paz deben interpretarse a partir del estado del conflicto armado. Esto es lo que se concluye de un estudio sobre la solución de los conflictos internos en los últimos cincuenta años (Walter, 1997), que apoya la hipótesis según la cual la duración y la intensidad de las guerras favorecen el inicio de las negociaciones, mientras que las condiciones de madurez, como el empate militar, parecen ser determinantes para que tales negociaciones culminen con éxito¹¹. Así mismo, la experiencia internacional sobre procesos de paz exitosos sugiere que en la medida en que las élites consideran que sus intereses económicos se encuentran seriamente amenazados y, que por lo tanto estarían mejor protegidos con una solución negociada que ponga fin a los conflictos, se produce un cambio decisivo que lleva a la dirigencia a abandonar su oposición inflexible a la salida política y a considerar las reformas como la opción más conveniente (Wood, 2002).

El estado actual del conflicto colombiano sugiere que el poderío militar alcanzado por las Farc —que se sustenta en haber logrado constituir una muy importante economía de guerra— determina también su perspectiva del presente, donde las fuentes de ingresos para la guerra parecieran inagotables¹². En consecuencia, esta guerrilla conserva una visión optimista de la continuación de la guerra y, por ello, un acuerdo verdaderamente atractivo sólo podrá producirse en la medida en que su capacidad de acción militar se transforme en magnitudes equivalentes de poder legítimo. En estas condiciones, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es un requisito indispensable para avanzar en el logro de la paz, entendiendo que el objetivo político del mayor esfuerzo militar del Estado en la lucha contra la guerrilla no puede ser otro que crear condiciones de madurez

⁹ Los estudios más recientes que comparan las tasas de crecimiento económico entre los períodos de mayor violencia y los de relativa paz, llegan a la conclusión de que la violencia explicaría una pérdida estimada entre medio punto porcentual del PIB (Cárdenas, 2000), hasta dos puntos del PIB en los últimos años (Vargas, 2003). Las comparaciones del desempeño de la economía colombiana con las economías de la región circundante indican que el conflicto sólo ha tenido un impacto marginal cuando no neutral sobre el crecimiento y la inversión (Echeverry, Salazar y Navia, 2001).

¹⁰ Durante el año 2002 la economía colombiana sólo creció 1.5%, cifra muy baja que no alcanza a tener un impacto favorable en la generación de empleo. Adicionalmente, la inversión extranjera cayó 19% y mientras descienden los ingresos del país las inversiones de los nacionales crecen en el exterior, provocando un déficit en cuenta corriente equivalente al 1.9% del PIB.

¹¹ El empate militar es una situación en la cual ninguno de los combatientes está en capacidad de hacer avances importantes en el campo de batalla debido a la fuerza del adversario y ninguno de los dos cree que la situación vaya a mejorar en el futuro cercano.

¹² En Colombia, al igual que en las naciones africanas que registran conflictos internos, los recursos económicos saqueados por los grupos armados son el fundamento de la prolongación del conflicto, mientras que, a diferencia de los países centroamericanos donde ha habido guerras civiles, la escasez de fondos y la clara división de la población en bandos opuestos llevó a una definición más rápida de la confrontación.

del conflicto, para abrir paso a una solución negociada.

Durante los diálogos con el gobierno de Pastrana los comandantes de las Farc dijeron: "Nosotros no tenemos nada que negociar, es el establecimiento el que tiene que decir qué cambios va a realizar". Con esta afirmación se pone al descubierto cómo desde su perspectiva política e ideológica las Farc se encuentran muy lejos de una negociación en firme (Ferro, 2003). Desconfían profundamente de la clase dirigente colombiana; le apuestan a la profundización de la crisis socioeconómica y la insurrección popular; consideran que no existe democracia en Colombia y por tanto no se puede garantizar su participación en política y menos el ejercicio legal a la oposición; tienen la percepción de que el entorno latinoamericano y en particular el de los países vecinos les es menos desfavorable; piensan que las experiencias de negociaciones con otros grupos armados en Centroamérica y en Colombia han sido un fracaso; y finalmente, la polarización actual les genera más desconfianza y más desprecio y por consiguiente insistirán en la confrontación que, de acuerdo con sus cálculos, les permitirá aumentar su poder, hasta alcanzar el equilibrio estratégico con el Estado para allanar el camino de la negociación.

Por lo pronto, mediante el control de las poblaciones, las Farc pretenden el reconocimiento de su influencia en la gestión local del país. Al constituirse como poder *de facto* en los municipios, buscan apoyarse en esta gestión local para ganar espacios de negociación con el poder central, reclamando legitimidad y representatividad nacional (Lair, 2001). Este aspecto se encuentra como un objetivo claro y preciso, de gran significado para esta guerrilla. Con esta conducta, se estaría desvirtuando el viejo mito de la presencia subversiva en las zonas, la cual ha sido frecuentemente explicada y desde hace muchos años, como consecuencia de la "ausencia del Estado", que es suplida por la guerrilla. La estrategia descrita, permitiría afirmar que la expansión de la guerrilla se da cuando se "saca" al Estado de una región, situación que le permite reemplazarlo y reafirmarse como grupo hegemónico.

El Eln, que ha buscado un espacio como actor político en un eventual proceso de paz con el actual gobierno, cuenta con un sector importante de esta organización que percibe la salida negociada como la única opción. Por otro lado, se enfrenta a la vertiginosa disminución de su poder militar, influencia sobre la población y el territorio, y está expuesto al acecho del Ejército y de los grupos paramilitares. Por lo tanto, su prioridad ahora es garantizar la supervivencia mediante una alianza estratégica con las Farc.

Los grupos paramilitares parecen estar decididos a ganar el estatus de parte en la solución del conflicto, lo que, según su visión, tar-

de o temprano debería derivar en reconocimiento político. Las masacres, la presión sobre el Eln, las continuas entrevistas con los medios donde pretenden negar la confluencia de intereses con el narcotráfico y la magnificación de sus acciones, hacen parte de esa estrategia. De no prosperar las negociaciones con el actual gobierno se puede prever que la violencia ejercida por estos grupos va a arrear, para demostrar que no se conforman con una salida que implique el sometimiento a la justicia y que sin ellos como interlocutores políticos no habría posibilidades de alcanzar una paz duradera.

En la sociedad colombiana no parece existir un consenso claro en términos de la paz o de la confrontación, tal como se colige de los sondeos realizados desde mediados de 2001. En pleno proceso de paz, 53% de los ciudadanos estaba a favor del diálogo y 41% en contra. En julio de 2003, las personas a favor del diálogo representan un 48%, contra 47% que apoyan la vía militar. Al observar la evolución de la opinión en este intervalo, se puede concluir que hay un 36% que se mantiene firme con el diálogo, mientras que el 41% se mantiene en la posición de aplicar mano dura. En otras palabras, de 5 colombianos se encuentra que 2 están a favor del diálogo, otros 2 a favor de derrotar a la guerrilla, y 1 se moverá de un extremo al otro dependiendo de las circunstancias del momento (Encuesta: *La fuerza del diálogo*, revista *Cambio*, No. 527 4-11 agosto/2003).

Por su parte, las élites económicas del país, que durante el gobierno Pastrana manifestaron que había que insistir en el diálogo para lograr una solución negociada, ahora creen que se puede lograr la derrota militar de la guerrilla. En efecto, un sondeo reciente muestra que el 69% de los líderes empresariales entrevistados piensa que hay que solucionar el conflicto por la vía militar, 74% está de acuerdo con el impuesto de 1.2% al patrimonio para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y 89% respalda la creación de una red de cooperantes e informantes de apoyo a la fuerza pública (*La gran encuesta de líderes empresariales*, Revista *Credencial*, No. 192 de noviembre de 2002).

CONCLUSIONES

En Colombia las estrategias y los movimientos tácticos de las organizaciones guerrilleras se han modificado en función de los cambios experimentados recientemente en la dinámica de la confrontación armada. Por lo tanto, a pesar de que la ampliación de la capacidad operativa y de inteligencia del Estado ya ha mostrado resultados positivos en la lucha contra la guerrilla, esto difícilmente implicará que se consiga el sometimiento de los alzados en armas por la vía militar. Los resultados obtenidos en este campo deben interpretarse como una contribución a la creación de condiciones para negociar la terminación de la guerra, por cuan-

to permiten contener la expansión de la guerrilla y bloquear el acceso a las fuentes de financiamiento, con lo cual la solución política del conflicto se convierte en una opción.

Si bien la insurgencia ha dejado de lado el enfrentamiento directo con el Ejército para evitar su derrota, optando por golpear indirectamente a su adversario mediante el sabotaje a la infraestructura económica y la intensificación del terrorismo en las ciudades, es necesario reconocer el alcance y las limitaciones de esta nueva conducta. Es cierto que la guerrilla ha identificado el sabotaje de la economía como el nuevo centro de gravedad del conflicto, en cuanto a través de una guerra de desgaste puede impedir su recuperación y por tanto la de su enemigo, pero al mismo tiempo sabe muy bien que la obtención de los recursos necesarios para lograr sus objetivos, depende de que el grado de afectación sobre la economía sea leve.

De otro lado, la urbanización del conflicto en el momento actual implica el riesgo muy serio de hacer militarmente vulnerable a la guerrilla, por cuanto demandaría de su parte contar con los medios para controlar a largo plazo las grandes ciudades y enfrentar el escalamiento de la confrontación armada que pondría en peligro su influencia sobre las zonas rurales estratégicas construida a través del tiempo con grandes esfuerzos. Vale la pena resaltar que no debe subestimarse el objetivo de extender el conflicto armado a las ciudades. La expansión a las ciudades podría ser el medio utilizado por la guerrilla en el futuro para adquirir una mayor capacidad de negociación sirviendo de sustento a una demanda de mayor participación en el poder.

De la misma forma como se ha modificado la dinámica del conflicto armado, el impacto de las actuaciones de sus protagonistas sobre la población civil también ha cambiado. La creciente magnitud de la violencia que los grupos paramilitares y las guerrillas dirigen contra los civiles es la característica preponderante del conflicto colombiano en el momento actual, pues las respuestas para mantener el control sobre las posiciones más preciadas se centran en la población. La competencia entre los protagonistas armados –que de momento han dejado de lado las aspiraciones territoriales concentrándose en el control de objetivos mucho más precisos– desata una dinámica que incrementa los homicidios indiscriminados por cuanto, de un lado, golpean tanto a miembros de grupos rivales como a no miembros y, por otro, potencian una espiral de acciones violentas que se concentran en zonas específicas de la geografía.

Cabe recalcar que ante el optimismo manifestado de la dirigencia económica del país, en términos de lograr la derrota militar de la guerrilla, se corre el riesgo muy alto de subestimar

hacia el futuro la capacidad de transformación e impacto del conflicto sobre la economía, con lo cual se pospondría la construcción de los consensos indispensables para superar la guerra interna a través de la vía negociada. Los mayores esfuerzos del Estado dirigidos a transformar la visión positiva que la insurgencia conserva de la continuación de la guerra deben estar acompañados de una clara disposición de las élites a efectuar concesiones, con lo cual estarían madurando las condiciones para lograr la solución negociada del conflicto.

Por último, los cambios experimentados recientemente en el conflicto hacen necesario que los esfuerzos del Estado colombiano en procura de la paz no sólo se dirijan al campo militar, sino también a la población civil para protegerla y garantizar su participación, como actor principal, en la definición del contenido y alcance de los acuerdos que pongan fin a la confrontación armada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Badel, Martha (1999), *Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1990-1998*, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.
- Bejarano, Jesús Antonio, Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Enrique León (1997), *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en áreas rurales*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia-Fonade, Cap. V.
- Cárdenas, M. (2000), *Costos económicos del conflicto armado y escenario económico de la paz*, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.
- Cohen, Jaqueline y George Tita (1999), "Diffusion in Homicide", *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 15, No.4.
- Collier, Paul (2001), "Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones de política", Bogotá, revista *El Malpensante*, No. 30.
- Echandía, Camilo (1999), *El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia*, Bogotá, Presidencia de la República, Observatorio de Violencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- Echeverry, Salazar y Navia (2001), *¿Nos parecemos al resto del mundo? El conflicto colombiano en el marco internacional*, Bogotá, DNP.
- Escobedo, Echandía y Salazar (2002), *Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH (1998-2002)*, Bogotá, Vicepresidencia de la República de Colombia.
- Ferro, Juan Guillermo (2003), "Las Farc, aún lejos de una negociación en firme", ponencia presentada en el Taller: Obstacles to Robust Negotiated Settlements of Civil Conflicts, Instituto Santa Fe (EE.UU.) y Universidad Javeriana (Colombia), Bogotá, mayo 29 al 31.
- Jean, François y Jean Chisstophe Rufin (1996), *Économie des guerres civiles*, París, Puriel.

Kaldor, Mary (2001), *Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquets Editores.

Naylor, R.T. (1993), "The Insurgent Economy: Black Market Operation of Guerrilla Organizations", en *Crime, Law and Social Change*.

Lair, Eric (2001), "Colombia una guerra contra los civiles", *Revista Colombia Internacional*, Bogotá, No. 49-50, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

_____ (2003), "Reflexiones acerca del terror en los escenarios de la guerra interna", *Revista de Estudios Sociales*, No. 15, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

Pécaut, Daniel (2002), "Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia civil", ponencia presentada en el *Seminario Internacional Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), 10 de septiembre.

Querubín, Pablo (2003), "Crecimiento departamental y violencia criminal en Colombia", tesis de grado del programa de economía para graduados de la Universidad de los Andes, Bogotá.

Rubio, Mauricio (1999), *Crimen e impunidad: Precisiones sobre la violencia*, Bogotá, TM Editores.

Salazar, Boris y María del Pilar Castillo (2001), *La hora de los dinosaurios, conflicto y depredación en Colombia*, Bogotá, Cerec.

Salazar, Gustavo (2000), "Evolución militar de las Farc", revista del Instituto de Estudios por la Paz, la Democracia y la Convivencia en Colombia, *Depaz*, No. 1, Bogotá.

Vargas, Juan Fernando (2003), "Conflicto interno y crecimiento económico en Colombia", tesis de grado del programa de economía para graduados de la Universidad de los Andes, Bogotá.

Walter, Barbara F. (1997), "La barrera crítica de la solución de las guerras civiles", *International Organization*, Vol. 51, No. 3.

Wood, Elisabeth J. (2002), "La movilización popular, los intereses económicos y las transiciones de los regímenes en El Salvador y Sudáfrica", en revista *Estudios Centroamericanos*, marzo-abril.